

Tras el aval ambiental a centenares de instalaciones solares y eólicas, España se prepara para un auge sin precedentes que ya crea tensiones

La gran explosión renovable: más de 1.400 proyectos en camino

M. PLANELLES / I. FARIZA
D. GRASSO, Madrid

Todos los expertos consultados para este reportaje coinciden: no hay precedentes de una explosión de energía renovable como la que se espera en los dos próximos años en España. ¿La razón? El visto bueno ambiental de las autonomías y el Gobierno a más de 1.400 proyectos de eólica y, sobre todo, solar. Esta nueva oleada se une a lo ya instalado en los dos últimos años, que también han sido de récord para la fotovoltaica, la tecnología que está viviendo el momento más dulce. Esta rápida y masiva expansión está ayudando a España a desengancharse de los combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático, y a obtener una electricidad más barata. Pero, a la vez, está causando tensiones derivadas de la competencia por el suelo, los impactos paisajísticos o la biodiversidad, lo que está acrecentando un cierto movimiento de rechazo en algunas zonas rurales.

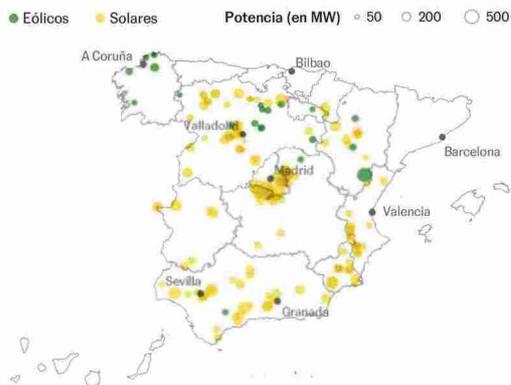
A la lucha climática se une la obligación que se ha fijado la UE de alejarse del gas y el petróleo de Rusia tras la invasión de Ucrania. Bruselas ha marcado el camino de forma cristalina: más renovables aún más rápido y eficiencia energética. Y en eso está la UE: en 2022, la eólica y la solar generaron una quinta parte de la electricidad de Europa (22%), superando por primera vez al gas (20%) y al carbón (16%), según los analistas de Ember. España fue, tras Alemania, el país de la UE que más solar produjo —aumentó un 21% respecto a 2021—. En el caso del viento, con un ritmo de expansión ahora más modesto, también fue la segunda nación que más electricidad volcó en la red.

Todo eso es ya el pasado. EL PAÍS intenta adentrarse ahora en el futuro inmediato, en lo que se vivirá los dos próximos años en España, uno de los países del mundo más atractivos para invertir en renovables. Para ese viaje en el tiempo la mejor ruta es analizar las evaluaciones ambientales de los proyectos ya aprobados, una información que en muchas ocasiones hay que extraer con sacacorchos de los boletines oficiales. El aval ambiental es imprescindible para que un proyecto salga adelante.

Cuando los proyectos superan los 50 megavatios (MW) de potencia—lo que comúnmente se conoce como macroparque—, es la Administración central la encargada de conceder o no los permisos. En estos momentos, hay 25 de estas grandes instalaciones en funcionamiento: 18 fotovoltaicas y siete eólicas. Pero, desde enero de 2022 y hasta el viernes, el *Boletín Oficial del Estado* ha publicado las declaraciones de impacto ambiental favorables de otros 182 macro-

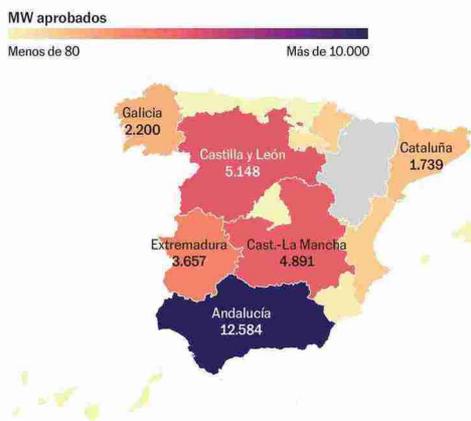
Macroproyectos eólicos y solares

Proyectos con aval ambiental



Proyectos con evaluación ambiental aprobada por los gobiernos regionales

Aragón aparece sin datos porque su Ejecutivo ha rechazado facilitarlos



Fuente: Registro de Instalaciones de producción de energía eléctrica.

EL PAÍS

proyectos (161 solares y 21 eólicos). Si todos salen adelante, supondrá multiplicar por siete los macroparques.

En el caso de los proyectos de menos de 50 MW, de cuya tramitación se encargan las autonomías, hasta el 25 de enero—la fecha límite para desatascar la tramitación de centenares de ellos fijada por el Estado— los gobiernos regionales habían dado el aval ambiental a otros 1.236 parques más, según los datos facilitados por 16 de las 17 autonomías (todas salvo Aragón, la única que no ha querido ofrecer esta información). En total, sumando los permisos de todas las administraciones, se trata de 1.418 instalaciones con una potencia conjunta de 68.856 MW. Es más de lo que hay instalado en España de fotovoltaica y eólica juntas ahora, que ronda los 50.000 MW. La mayoría de esos nuevos proyectos debería estar funcionando en junio de 2025, según el calendario del Ministerio para la Transición Ecológica.

Las energías limpias generaron en 2022 la quinta parte de la electricidad en la UE

El Gobierno ha dado el visto bueno a 182 grandes plantas (más de 50 megavatios)

“Hay que ver cuánto de eso acaba construyéndose, pero la realidad es que nunca ha habido tantos proyectos grandes en marcha. España ya es un país líder en renovables y todas estas declaraciones de impacto ambiental aprobadas van a consolidar aún más su posición”, apunta Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de BeBartlet.

Medidas compensatorias

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, recuerda que la mayoría de los proyectos que han recibido la declaración de impacto ambiental favorable “deben modificarse y aplicar medidas compensatorias para ejecutarse”. Tras ese aval, los promotores deben lograr la autorización inicial, la de construcción y, por último, la de funcionamiento. “No sabemos cuántos asumirán estas exigencias y seguirán adelante”, añade Aagesen, quien insiste en que lo que “se materialice será excelente con el medioambiente y con el territorio”. De momento, según los datos recabados por EL PAÍS, 21 de los 182 macroparques en cartera del Gobierno central ya han logrado la autorización inicial o la de construcción.

Pero, en algunos casos, las condiciones impuestas en el proceso ambiental—como reducción de potencia y superficie o compensaciones—o la financiación—la subida de tipos ha complicado mucho las cosas— pueden truncar las cuentas y dejar el proyecto en la cuneta. “Aquellos en los que antes los números salían justitos, ahora pueden no salir”, admite el jefe de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso. La consejera extremeña para la Transición Ecológica, Olga García, considera que ese no será el caso de los 140 proyectos (3.657 MW) a los que esa autonomía ha concedido el permiso medioambiental. “Prácticamente todo eso va a salir adelante por el trabajo previo que hemos hecho con los promotores”, sostiene García, que no oculta que las renovables son una de las prioridades que se ha fijado su Gobierno. “No solo son beneficiosos en la lucha contra el cambio climático, sino también en la generación de empleo y de riqueza”, argumenta. En Extremadura, García defiende que la implantación de la solar está siendo bastante pacífica. Pero en otros territorios no está sucediendo lo mismo.

“Se está empezando a crear una coalición del no a la que se unen algunos partidos: es un riesgo a la misma altura del negacionismo climático directo”, advierte Pedro Fresco, ex director general de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana destituido por Compromís tras imponerse en ese partido la corriente que



aboga por poner freno al desarrollo de los grandes parques. “Si estos movimientos tienen tanta tracción es precisamente porque no estamos sabiendo explicar por qué esto es tan importante para todos. No para las empresas, sino para toda la sociedad”, desliza.

El antropólogo y profesor de la Universidad de Búfalo (Nueva York) Jaime Franquesa conoce bien los movimientos de oposición a las renovables. De eso trata su último libro—*Molinos y gigantes* (Errata Naturae)—, en el que analiza este fenómeno en Cataluña, una de las comunidades más retrasadas en el despliegue de energías limpias. En su opinión, el caldo de cultivo del creciente rechazo a estas tecnologías es una “sensación de agravio” en las áreas rurales: “Lo que hay en la llamada España vaciada es una sensación de abandono que precede a las renovables; hay una sensación de que siempre les tiene que tocar a ellos”, dice. “Uno de los fracasos de la España democrática es que la distancia entre el campo y la ciudad se ha acrecentado”.

Buena parte de la oposición se ha aglutinado alrededor de la plataforma Allente, en la que confluyen multitud de movimientos de distinta índole. Una de las organizaciones que forman parte de esa plataforma es la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Su presidente, Gerardo Báguena, critica lo que entiende como un cambio de postura del Gobierno: “Hemos pasado de empujar al territorio rural, que estaba abandonado, a apoyar una

LA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA



Macroplanta fotovoltaica de la Mula, en Murcia, el viernes. / ALFONSO DURÁN

transformación del paisaje y del entorno sin precedentes en solo dos años; no ha dado tiempo a asimilarlo". En su opinión, los parques "son incompatibles con algunas actividades", como el turismo. "Lo que la gente busca cuando viene es la belleza y la singularidad del paisaje". Bágüena habla de una "competición por el suelo" en las zonas rurales: "Los promotores pagan entre cuatro y cinco veces más de lo que se saca ahora por una hectárea, y contra eso no se puede competir".

Solo los 182 macroproyectos con el aval ambiental del Gobierno se extenderían por una superficie vallada de 53.000 hectáreas, el 0,1% del territorio español. Y lo que los promotores buscan mayoritariamente son suelos de secano: "La fotovoltaica se va a los suelos con cultivos de cereal o remolacha, que tienen menos productividad", explica el consejero de Sostenibilidad de La Rioja, Alejandro Dorado Nájera.

"¿Por qué no pueden ir a zonas degradadas ya o a las zonas mineras?", se queja Bágüena. Franquesa apunta a que el "despliegue renovable está funcionando con las leyes del mercado". Dos son los factores que buscan las promotoras: "El lugar en el que hay más sol o viento y en el que menos se pague por el suelo", lo que conduce hasta las tierras de secano, los municipios sin segundas residencias y las zonas con menos densidad de población. Dentro del movimiento de rechazo, también hay críticas hacia el papel que juegan las grandes empresas y fondos de inver-

sión, que son los que tienen el músculo financiero para sacar adelante los grandes parques. Por ejemplo, de los 182 macroproyectos con aval estatal, Iberdrola, Enel y TotalEnergies acaparan más autorizaciones.

"En La Rioja nos preocupa la aceptación de los proyectos", reconoce Dorado. "Pero intentamos explicar que los gobiernos no decidimos dónde se ponen las renovables, sino dónde no se pueden poner". En esta comunidad se ha vetado el desarrollo de proyectos en dos tercios del territorio. "Y en el tercio restante, los proyectos pasan un filtro y un control porque no vamos a luchar contra la crisis climática agravando la crisis de biodiversidad", asegura el consejero.

Juan Carlos del Olmo, responsable de WWF, no tiene dudas: "Necesitamos sí o sí las energías verdes. España está en la zona cero del cambio climático, este verano lo volveremos a ver con más fuerza, y solo tenemos una línea de avance: las renovables". Y añade: "Si apostamos por cerrar el carbón y por el cierre progresivo de la nuclear, no queda otra". Pero ese despliegue, que "debe ser muy rápido", se produce en medio de una situación un tanto caótica generada por la falta de "un ordenamiento territorial real en España".

Competencias urbanísticas

Las competencias urbanísticas están transferidas a las comunidades y esto ha dificultado que se haya aprobado una zonificación vinculante por parte del minis-

Los detractores opinan que los parques afectan al turismo rural

"¿Por qué no van a zonas degradadas?", pide el presidente de una asociación

rio, como pedían las ONG ecologistas, explica Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife. El ministerio elaboró en su día un mapa en el que se señalaban las zonas sensibles que no deberían ser aptas para la implantación de renovables. Pero no era de obligado cumplimiento. Y alrededor del 20% de los proyectos de renovables en los que SEO/BirdLife ha presentado alegaciones no cumplían con esa zonificación e incluía actuaciones en áreas sensibles. "Las empresas tienen que entender que si presentan planes ahí vamos a alegar y los procesos se alargarán", apunta Ruiz, quien recuerda que su organización lleva implicada en la tramitación de los proyectos renovables desde los noventa, cuando se instalaron los primeros parques eólicos en Cádiz.

Del Olmo, de WWF, aprecia una falta de transparencia que impide tener claro el mapa del desarrollo de las renovables. Pero, con la información que se va extrayendo con cuentagotas, se vislumbran ya las comunidades que pisan el acelerador y las que pisan el freno, lo que acrecienta el agravio entre regiones. "No puede haber regiones de primera y de segunda", se queja el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero Palomo. "No puede ser que Madrid ponga la industria y nosotros la electricidad. A Aragón le ocurre lo mismo con Cataluña; se necesita una solución estatal". Una posible vía de compensación podría ser la fiscalidad, defiende por su parte la consejera extremeña.

"Se debe compensar a las comunidades que están priorizando el despliegue renovable", pide García. En cualquier caso, ambos consejeros, del PSOE, no tienen dudas del camino que han emprendido de apoyo a la solar.

Pese a las quejas y temores, las ONG ecologistas más conocidas no se alinean con los postulados que abogan por frenar las renovables y las moratorias. Pero sí vislumbran un futuro próximo de judicialización, algo a lo que contribuirá la aprobación a finales de 2022 de un real decreto con el que el Gobierno agiliza la tramitación ambiental y se permite que los proyectos que no están en la Red Natura 2000 (el sistema de protección de la naturaleza de la UE) puedan seguir una vía rápida de evaluación. "Se reduce la participación ciudadana y esto genera más rechazo y descontento en el territorio", opina Ruiz, de SEO/BirdLife. Transición Ecológica, sin embargo, rechaza esa idea. "No se ha aligerado ni un milímetro la exigencia de garantías ambientales en todos los procesos de evaluación", afirmaba hace unos días Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, en una entrevista con este periódico.

La judicial es una importante baza con la que cuenta el movimiento más contrario a las grandes instalaciones renovables. "Ante la ausencia de diálogo, vendrá la vía judicial", avisa Bágüena. "Estamos recibiendo llamadas de empresarios dispuestos a pagar los pleitos", añade respecto a la situación en Aragón, una de las zonas de más conflicto donde Teruel Existe ya ha presentado varias denuncias contra la tramitación realizada por el Gobierno regional. "Es dinero de gente oriunda de Teruel y Zaragoza que ha hecho fortuna y que ahora no quiere esos proyectos", añade Bágüena. "Es un tema emocional".

Al margen de este frente, a las promotoras les preocupan los plazos. José María González, de la Asociación de Empresas de Energía Renovables, lo explica así: "Va a ser difícil encontrar *epcistas* [empresas de diseño y construcción de proyectos], conseguir transformadores de tensión... Todo, suponiendo que el resto de equipos estén disponibles. Va a ser algo completamente nuevo, que va a poner a España a la cabeza de la demanda mundial de estos componentes, China y Estados Unidos al margen".

Donoso, de UNEF, aboga por su parte por "una extensión del plazo límite de dos años". Ahora, dice, "hay más cuellos de botella de mano de obra en autoconsumo que en suelo, pero empieza a haber problemas en suelo".

Juan Virgilio Márquez, de la Asociación Empresarial Eólica, apunta a los componentes: "Va a generar tensiones. Con todas las fábricas españolas solo para el mercado nacional, saldrían unos 4.000 MW. Pero no todo va para el mercado nacional". La cadena de suministro, dice, debe dotarse de más capacidad en tiempo récord: dos años. "No va a ser fácil".



Ocho pueblos del Maestrazgo, en Teruel, acogerán un parque eólico de 125 aerogeneradores gigantes por el que ingresarán una riada de euros. Pero parte de la población se opone

Los molinos tensan el ambiente en Cantavieja

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA
Cantavieja

En Cantavieja, un bonito pueblo de Teruel subido a un abismo, se juega estos meses el futuro de la humanidad. Si solo fuera esto, en abstracto, la cosa sería sencilla. Lo malo es que también está en juego el futuro inmediato y concreto del pueblo y el de sus 700 habitantes. Y por supuesto el del alcalde, Ricardo Altabas, del PP. Y el del bellissimo paisaje de la comarca. Cantavieja es uno de los ocho pueblos del Maestrazgo incluidos en el más potente parque eólico que se va a construir en España: 125 molinos de nueva generación, de una altura inusual: algunos de ellos miden casi 200 metros desde la base a la punta del aspa. Los molinos, que normalmente se ven desde la carretera, alcanzan, como mucho, 120 metros.

Cuando comiencen a girar todos, en condiciones de viento óptimas, según calcula la empresa promotora, Forestalia, serán capaces de generar la electricidad suficiente como para alimentar 895.000 viviendas. Y evitarán que a la castigada atmósfera se arrojen las venenosas toneladas de CO₂. La humanidad, pues, respira contenta. Lo malo es que en Cantavieja, y en Mosqueruela (550 habitantes) y en Fortanete (200), y en los otros pueblos afectados, hay gente —no todos— que no lo está. No se oponen, claro, a la energía eólica, renovable, lim-

pia, perfecta, abstracta. Ellos también forman parte de la humanidad. Lo que no aceptan es que la pongan precisamente a un paso de su pueblo, en las montañas que se asoman a su ventana, en la pradera donde pasean muchas tardes. En su vida.

Joaquín Gamallo, un ganadero de 47 años que se conoce de memoria las sierras y laderas que bordean su pueblo, Mosqueruela, es uno de estos habitantes de la zona que se opone con toda su alma a los molinos. Conduce con la habilidad (y la velocidad) de Carlos Sainz su potente 4x4 por unas pendientes de cabras (efectivamente se ven cabras salvajes) para enseñar al que quiera los futuros emplazamientos de los gigantescos molinos en la cresta de las lomas. Las zonas se denominan Jujambra, Pinar Ciego o Monte del Rayo. "Se llama así porque caen muchos rayos", explica Gamallo. "Aquí es verdad eso de que es más difícil que te caiga la lote-

El municipio recibirá siete millones solo en concepto de licencias de obras

La planta generará energía para abastecer a 895.000 viviendas

Algunas estructuras miden casi 200 metros, cuando suelen alcanzar 120

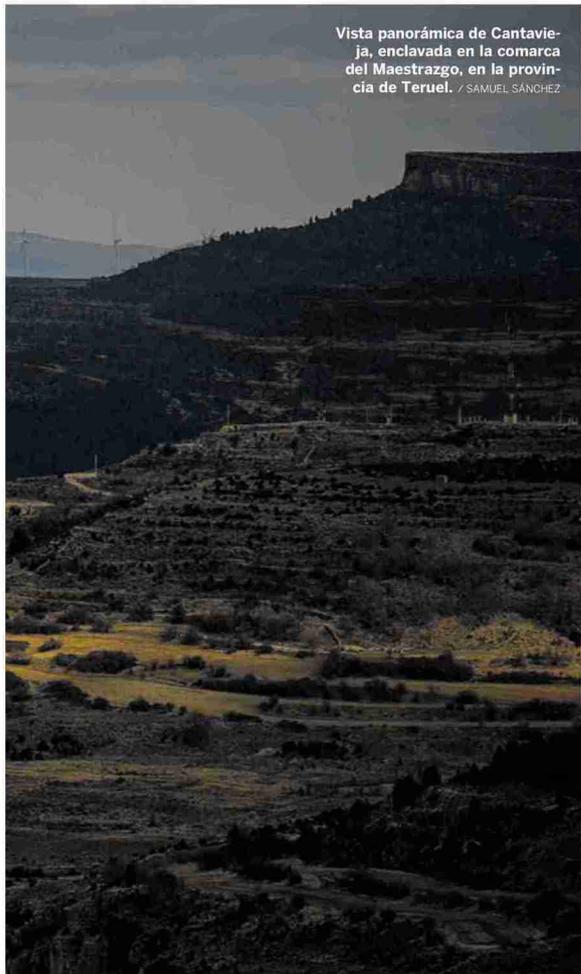
ría que un rayo, porque yo conozco a dos o tres que les ha caído cerca un rayo y nunca les ha tocado la lotería". Las montañas que recorre Gamallo son lomas cuajadas de pinares, con pistas de tierra, y a veces sin pista siquiera, tan espesas de matorral y tan inaccesibles que sirvieron en la década de los cuarenta como escondite de guerrilleros: un claro del bosque es conocido como Campamento de los Maquis. Hay áreas intocadas desde hace decenas de años. Lo prueba que aún conservan las trincheras de piedra de la Guerra Civil. Con caminos difíciles de recorrer. No es raro que cada año se pierdan los números novatos de la Guardia Civil y Gamallo, entre otros, tenga que acudir con su coche todopoderoso a rescatarlos. El ganadero consulta en la aplicación del móvil la localización exacta de algún molino y la señala con el dedo. Cuesta imaginar un molino de casi 200 metros de alto en un sitio

como este, rodeado de pinos y matorrales, con neveros a los lados. Luego dice: "Yo no soy un indigente. Vivo bien con mi ganado. Y uno de mis dos hijos quiere vivir aquí de esto. No necesitamos ayudas, ni molinos, ni dinero. Lo que queremos es que nos dejen en paz. Yo alquilo estas tierras para traer aquí mis vacas. ¿Dónde las voy a llevar cuando todo esto esté lleno de molinos?".

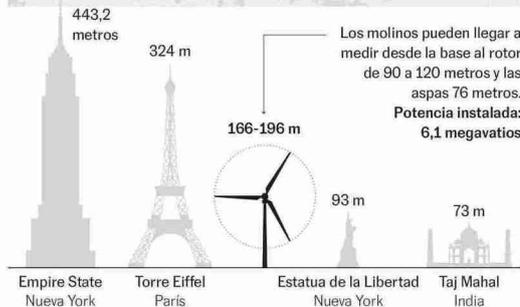
En Cantavieja, el alcalde, Ricardo Altabas, de 55 años, carnívero, dueño de una tienda de productos de alta calidad de la zona, se hace otra pregunta, no menos vital: ¿habré acertado? Altabas ha accedido —él y el pleno municipal, por unanimidad— a que se coloquen 17 molinos en los alrededores de su pueblo. A cambio, la localidad recibirá una millonada de euros de Forestalia. Como la lotería de la que hablaba Gamallo. El dilema del alcalde (de los ocho alcaldes: todos han estado de acuerdo), lo que, según cuentan, les ha costado muchas noches sin dormir, es si el precio vale la pena: si van a acertar con la decisión. Por sus molinos, Cantavieja percibirá casi de una tacada 7.150.000 euros por impuestos de obras en cuanto empiecen a abrirse los caminos. Durante 30 años recibirá también 350.000 euros anuales por otra tasa. Como Forestalia paga además 9.000 euros al año a cada propietario de las tierras donde se ubica cada moli-

LA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA

Vista panorámica de Cantavieja, enclavada en la comarca del Maestrazgo, en la provincia de Teruel. / SAMUEL SÁNCHEZ



125 molinos para generar electricidad en el Maestrazgo



Fuente: Reuters y elaboración propia. EL PAÍS

no, y 8 de los 17 molinos de Cantavieja se instalarán en terrenos municipales, el Ayuntamiento percibirá 72.000 euros añadidos durante esos 30 años. Una riada de dinero para un pueblo cuyo presupuesto anual es de un millón de euros.

“Y no hay plan b”, se explica Altbas. “Es un tren que hay que coger. Porque no va a pasar otro por aquí. A mí no me gustan los molinos. A nadie le gustan. A mí, como a cualquiera, me gusta el paisaje de mi pueblo. Pero aquí han traído planes

de naturaleza, han catalogado la zona dentro de la Red Natura, la han incluido en la ZEPA [Zona Especial de Protección de Aves], pero nada de esto da dinero. Y los molinos, sí. Mucho. Y este dinero puede servir para revitalizar el pueblo”, explica. “Podremos atraer médicos, que el médico se piense si quiere irse a vivir a otro sitio porque le podemos dar un coche, o una casa. Nuestros estudiantes tendrán las tabletas más modernas, las mejores pizarras, las instalaciones más a la última. Podremos hacer viviendas sociales para que se instalen familias, o para que los jóvenes no se vayan, podremos ayudar a las pequeñas empresas a que amplíen negocios o a que se instalen”.

Cantavieja es un pueblo medianamente próspero. Las calles, de aire medieval, están muy cuidadas. Dispone de un hotel de cuatro estrellas donde se alojan los turistas que vienen a esquiar en unas pistas cercanas o a pasear por las montañas que lo rodean. Cuenta además con una plaza mayor porticada renacentista, bellamente iluminada por la noche. En los últimos años no ha perdido mucha población, estancándose en esos 700 habitantes. Pero en 1920 llegó a tener 2.000 vecinos. Por eso el alcalde mira de reojo a localidades cercanas como La Estrella, que contaba hasta hace poco con dos habitantes y que ahora ya es un pueblo fantasma más. O al cercano Tronchón, con menos de 70 habitantes, incluido en el plan del parque eólico, y que ingresará tres millones de euros por impuestos de obras más casi 200.000 euros anuales por tasas y alquiler de molinos en terrenos municipales. “El alcalde de Tronchón me ha dicho a mí que morirá con las botas puestas, que puede que su pueblo quede vacío dentro de unos años, pero que por lo menos, gracias a los molinos, esos años vivirán mejor y podrán, por ejemplo, contratar a alguien para que abra el bar todo el tiempo”, cuenta Altbas.

De la misma opinión es el alcalde de La Iglesia del Cid, de 400 habitantes, Fernando Safont, del PSOE: “No sé si será la solución, pero yo con el dinero que reciba podré, por ejemplo, convertir el Ayuntamiento en la principal empresa de empleo. Además, toda la operación es legal: el ministerio lo ha avalado”.

Vida útil

Safont se refiere a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó, el 1 de diciembre de 2022, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, imponiendo, eso sí, determinadas restricciones que Forestalia está obligada a obedecer. Entre otras, la de reducir el número de molinos, de los 161 inicialmente previstos a los mencionados 125. También se especifica que al término de la vida útil del parque la empresa promotora se compromete a desmontarlo por entero. Para eso depositará un aval económico antes de empezar las obras a fin de garantizar que, pase lo que pase con la empresa, habrá siempre fondos suficientes para des-



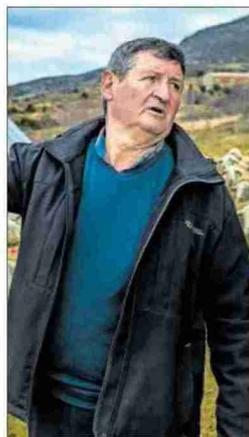
Oscar Bailón, guarda forestal. / S. S.

Un guarda forestal de la región teme que el turismo huya



Lourdes Villaroya. / S. S.

Una vecina de Fortanete lamenta la destrucción del paisaje



José Antonio Palomero. / S. S.

“Estaba a favor antes de que me tocara”, dice un ganadero con molino en su finca

mantelar el parque. Pero para quitarlo, primero habrá que instalarlo. Carlos Reyero, director general de Forestalia, consciente de que aún quedan permisos municipales y regionales por obtener, calcula que las obras empezarán, en determinadas zonas, en seis meses. Subir a esas montañas de caminos de tierra aspas de una pieza de 76 metros de altura e izarlas con grúas para atornillarlas a la base del aerogenerador será una tarea digna de otro reportaje.

Ya se ha estudiado cómo se modificarán las carreteras, los caminos y los accesos. Paradójicamente, el viento que bate las crestas de esas colinas constituirá una dificultad añadida a la hora de erigir los molinos. Si todo sale como está previsto, las aspas gigantes de los 125 aerogeneradores estarán moviéndose en algún momento de 2024 o a principios de 2025.

Los beneficios no serán por entero para Forestalia, asociada con un fondo de inversión compuesto por pensionistas daneses que serán los que, a la larga, se llevarán el 80% de lo que rinda la electricidad producida.

División

Mientras, en los bares y en las calles de Cantavieja —y en Mosqueruela, y en Fortanete— se habla de cualquier cosa menos de los molinos a fin de no discutir más entre ellos. El proyecto ha dividido al pueblo. José Antonio Palomero, un ganadero y pastor de ovejas de 60 años que no se ha ido jamás de vacaciones, está a favor. “Y que conste que ya estaba antes de que me tocara”, especifica. La frase alude a que en unas fincas de su propiedad irá uno de los molinos, por lo que percibirá 9.000 euros al año desde el instante en que empiece a funcionar. Durante 30 años. “Será bueno para mí. Pero también para el pueblo. Traerá beneficios. ¿El paisaje? No afectará tanto. No me da pena. Estoy aburrido de verlo”, cuenta.

Al hotelero de Fortanete José Manuel Bernal también le ha correspondido un molino en sus tierras. Pero no lo quiere. Ni ese ni ninguno. “Esto no servirá. Y el dinero que llegue será como el de la lotería, que se gastará rápido. No es el lugar adecuado para emplazar tantos molinos. Será la puntilla para la comarca”, aventura. Ni la universitaria Ainhoa Gascón, de 22 años, ni el guarda forestal Óscar Bailón, ambos de Cantavieja, ni Lourdes Villaroya, de 50, original de Fortanete, los quieren tampoco. Temen que ayentent al turismo, a los cazadores, a los buscadores de setas, a los que vienen de visita los fines de semana o a los que quieren quedarse a vivir para siempre. También que el paisaje de su tierra cambie, se afee, se vuelva irreconocible. En una palabra: tienen miedo de lo que sucederá en las vidas de todos cuando los molinos empiecen a girar.

El temor al futuro de su pueblo también lo siente el alcalde Altbas. Precisamente por eso ha decidido aceptar el proyecto después de tirarse noches sin dormir. El tiempo dirá si ha acertado.